

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

ASUNTO	SENTENCIA 1ª. INSTANCIA
PROCESO	ACCIÓN POPULAR
ACCIONANTE	MARIO RESTREPO
COADYUVANTE	COTTY MORALES C.
ACCIONADO	APRECIAR SEGUROS LTDA
RADICACIÓN	66001-31-03-001-2022-00034-00

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO

Pereira. Risaralda. Doce (12) de julio del año dos mil veintitrés (2023).

Procede el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda dentro de este trámite de ACCIÓN POPULAR promovida por MARIO ALBERTO RESTREPO ZAPATA en contra de APRECIAR SEGUROS LTDA.

I.

ANTECEDENTES

HECHO:

Manifiesta el actor popular que el representante legal del establecimiento de comercio ubicado en la carrera 7 Nro. 18-80 centro de esta Ciudad, no cuenta con convenio actual con entidad idónea certificada por el Ministerio de Educación Nacional apta para atender la población objeto de la ley 982 de 2005, por lo que se vulneran los derechos colectivos como el acceso a los servicios públicos, y a la prestación eficiente y oportuna, cita el literal j, art 4 ley 472 de 1998 y art 29 CN,, se desconocen los tratados internacionales tendientes a evitar todo tipo de discriminación.

PRETENSIONES

Solicita se ordene a la accionada a que contrate con entidad idónea la atención para la población que manda la ley 982 de 2005, se concedan costas y agencias en derecho.

II. CRÓNICA PROCESAL

La demanda fue inadmitida mediante auto del 3 de febrero de 2022, subsanada se procedió a su admisión el 11 de febrero siguiente, dándose las órdenes de notificación y publicación pertinentes¹.

¹ Archivos digitales 04 y 06

Se impulsó oficiosamente por ese Despacho, remitiendo los oficios correspondientes a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Juzgados Civiles del Circuito, igualmente el aviso a la comunidad con publicación en la página web.

Por secretaría se envió notificación a través del correo electrónico reportado en el certificado de cámara de comercio; el cual fue rechazado. Igualmente se intentó de manera física por secretaria, según constancia que obra en el pdf 20 sin resultados positivos. Por lo cual se ordenó el emplazamiento mediante auto del 27 de enero de 2023².

En providencia del 1º. de febrero, se negó la solicitud de desistimiento del actor popular.

Vencido el término del emplazamiento se designó curador ad-litem, en providencia del 22 de marzo de 2023, en el mismo se negó un recurso del accionante³. Notificado el abogado contesto oportunamente la demanda (pdf. 31)

En auto del 18 de abril, se tuvo por contestada la demanda, se ordenó dar traslado de las excepciones de mérito y se negaron otras solicitudes del actor popular⁴.

Mediante auto del 8 de mayo se fijó fecha para la audiencia de que trata el artículo 27 de la Ley 472, se aceptó la coadyuvancia de la señora Cotty Morales C.⁵

La audiencia fue realizada el 17 de mayo, declarándose fallido el pacto, se decretaron pruebas, en la misma se recibió interrogatorio al señor Herman Trujillo Hernández como representante legal de la accionada⁶.

Mediante proveído del 18 de mayo de 2023, se corrió traslado para alegar, con pronunciamiento de ambas partes.

El 26 de mayo se negó una solicitud de la coadyuvante.

III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El curador ad-litem de la accionada, señaló frente al hecho no constarle, pero que, sin embargo, del trabajo de campo realizado puede decir que no es cierto lo mencionado respecto de que su procurado se encuentre transgrediendo los derechos invocados. Se opuso a las pretensiones y solicitó fueran negadas.

Excepciones de mérito.

1. FRENTE AL CONCETO DE SERVICIO PÚBLICO

² Archivo digital 21

³ Pdf 27

⁴ Pdf 35

⁵ Pdf 39

⁶ Archivo digital 40

Que su procurador no está llamado a dar cumplimiento a estas obligaciones en razón a que ni siquiera se encuentra en este lugar, y además a que el establecimiento de comercio al cual se ha accionado NO presta un servicio público.

Al verificar las competencias, función y/o finalidad del establecimiento, no hay lugar a duda respecto a que, un establecimiento es un conjunto de bienes, es decir, es solo un bien mercantil, cita el artículo 515 del Código de Comercio.

Que al ser un bien mercantil conlleva a concluir y comprender que, no significa que todo establecimiento de comercio presta un servicio público.

2. FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA DE LA ACCIONADA

La empresa apreciar seguros no tiene legitimación en la causa por pasiva en razón a que en el lugar de los hechos que alega el actor, y luego de la visita realizada tanto por el suscrito profesional del derecho así como por los asistentes judiciales del despacho, la precitada compañía no opera en el lugar en que el actor manifiesta.

Aporta fotografías del edificio y oficina denunciados, para continuar señalando que: en este lugar exista oficina o lugar donde se atienda al público; siendo claro que no se requiere intérpretes, traductores y otros especialistas de la sordera y sordoceguera para garantizar el acceso pleno de los sordos y sordociegos alguno en el establecimiento de comercio accionado

Por lo tanto y en vista de que no existe causalidad entre lo pretendido por el actor y las conductas acciones u omisiones de la accionada, se ratifica en su posición de inexistencia de legitimación en la causa por pasiva y por lo tanto solicita se despache en este orden la acción popular, esto es, declarando no probadas las pretensiones y probadas las excepciones de mérito y fondo.

3. INEXISTENCIA DE DAÑO O AMENAZA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS – INAPLICACIÓN DEL DEBER DE ACATAMIENTO DE LA LEY 982 DE 200

Que el lugar en el cual funge el establecimiento de comercio cumple de manera estricta con la actividad económica establecida en el certificado de matrícula mercantil consistente en –según la CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CIIU – la actividad del Código CIIU: K6621 referente a Venta de seguros.

Que no obstante, el mercado asegurador no cuenta con productos para este grupo poblacional, y su venta además cuenta con restricciones en general.

Además, la ley 982 del 2005, fue expedida pero para ser garantizar el acceso ante la jurisdicción del Estado, siendo de su competencia y no de particulares.

4. GENÉRICA

Solicita se reconozca cualquier excepción o causa exceptiva que resulte probada en el trámite procesal y cuyas circunstancias jurídicas y fácticas (i) obstruyan el

nacimiento de la relación jurídica pretendida; (ii) las que modifiquen los efectos jurídicos de los hechos que apoyan el trámite procesal y las pretensiones pedidas y/o (iii) las que imposibiliten parcial o totalmente cualquier pronunciamiento judicial condenatorio

Este medio exceptivo se presenta en merito a la imposibilidad de disposición de los derechos en litigio, así como a que carezco de información sobre lo relatado por el demandante, razón por la que no puedo ni negar ni afirmar lo que aquí se discute.

Que no existe sustento probatorio para culminar con una condena en contra de la parte que agencio aun cuando la carga de la prueba correspondía al accionante quien no ha cumplido tal evento.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

.- Del accionado

El curador ad-litem de la accionada, se ratificó en todas y cada una de las manifestaciones de defensa de la parte que procuro en esta causa procesal, así como de las excepciones formuladas y las pruebas decretadas, practicadas y recaudadas. Solicito declarar probadas las excepciones y desestimar las peticiones.

.- Del accionante:

Fueron extemporáneos.

V. FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES

Los arts. 13 y 47 de la Constitución Política, consagran la protección del estado y los derechos de las personas con limitaciones físicas.

El art. 88 de nuestra carta, regula las acciones populares dirigidas a “...*la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad...*”, entre otros.

La Ley 472 de 1998, desarrolla el artículo 88 anteriormente citado, y frente a las acciones populares, se estableció en su artículo 9º. que estas acciones proceden contra toda acción u omisión de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos los derechos e intereses colectivos. Como características de esta solicitud especial se han destacado: que se trata de una acción pública, ya que puede ser ejercida por cualquier persona, sin necesidad de abogado; su trámite es preferencial, conciliable, de carácter preventivo o restitutorio⁷.

La Corte Constitucional, en cuanto al objeto de la acción popular señaló:⁸

⁷ Quinche Ramírez, Manuel Fernando. Derecho procesal constitucional Colombiano. Acciones y Procesos. Pag.294 a 300. Ediciones Doctrina y Ley. 2015.

⁸ C-215 de abril 14 de 1999.

“...el inciso primero del art. 88 de la Carta al consagrar las denominadas acciones populares como instrumentos de defensa judicial de los derechos colectivos, señala también el ámbito material y jurídico de su procedencia en razón de la naturaleza de los bienes que se pueden perseguir y proteger a través de ellas. Tales mecanismos están concebidos para operar de manera específica dentro del marco de los derechos e intereses colectivos que son, específicamente el patrimonio público, igualmente el precepto constitucional señala como objeto y bienes jurídicos perseguibles y protegidos por virtud de estas acciones, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica, sin que esta enumeración sea excluyente de otros derechos o intereses jurídicos de la misma categoría que dentro de sus competencias defina el legislador y que no contraríen la finalidad pública o colectiva y concreta a que quedan circunscritas estas acciones, por sustanciales razones de lógica y seguridad jurídica.

“Así mismo, se recalca como característica fundamental de las acciones populares, su naturaleza preventiva, pues los fines públicos y colectivos que las inspiran, no dejan duda al respecto y en consecuencia no es, ni puede ser requisito para su ejercicio el que exista un daño o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a través de ellas.”

En sentencia T-466 de 2003, señaló la Corte Constitucional:

“..., la jurisprudencia constitucional ha analizado con bastante amplitud el contenido, la finalidad y características de las acciones populares a que se refiere el artículo 88 de la Carta Política y, ha establecido que se trata de acciones encaminadas a la protección de los derechos colectivos de la comunidad, razón por la cual pueden ser promovidos por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando se presenten un daño o amenaza a un derecho o interés común, sin más requisitos que los establecidos por la ley para el efecto. Las acciones populares contenidas en el inciso primero del artículo 88 superior, revisten ciertas características, que fueron recogidas en la sentencia C-215 de 1999, en la cual se analizó la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 472 de 1998...”

Nuestro Tribunal Superior en Sala Civil – Familia, explicó:

“... la acción popular fue introducida a nuestra Constitución Política en el artículo 88 y posteriormente desarrollada por la Ley 472. Tal normativa prescribe que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Además, se puede interponer contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos (Artículo 90 de la Ley) y su objeto es el amparo de los derechos colectivos, que se caracterizan, porque su titularidad la tiene la comunidad en general, son transindividuales e indivisibles.

Son presupuestos de la misma: (i) Una acción u omisión de la parte demandada; (ii) La existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana; y, (iii) La relación de causalidad entre la acción u omisión y la vulneración de tales derechos e intereses, que deben ser acreditados, carga que incumbe al demandante, salvo que exista imposibilidad para ello (Artículo 30)”⁹

En este marco se erigió la Ley 361 de 1997, *“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”*, generando en el Estado la obligación de garantizar que en el ordenamiento jurídico esté inmerso en la prevalencia de los derechos de los discapacitados y su integración, y

⁹ Acción popular rad. 66682-31-13-001-2016-00586-02 y 21 acumuladas, sentencia Mayo 28 de 2018. M.P. Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo.

no discriminación en todo el territorio (arts. 2 y 3). reglamentada parcialmente por el Dcto. 1538 de 2005, Dcto. 734 de 2012 y adicionada por la Ley 1287 de 2009.

.- Ley 982 de 2005, *“por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones”*.

.- Ley 1425 de 2010 (Dic. 29), *“por medio del cual se derogan los arts. 39 y 40 de la Ley 472 de 1998.”*

.- Ley 324 de 1996 *“por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”*, se prevé la introducción de tecnologías y el servicio de intérpretes.

El Estado Colombiano ha adoptado normas internacionales como la *“Declaración Universal de los Derechos Humanos”* (1948), *“Declaración de Derechos de las Personas con Retardo Mental”* (1971), *“Declaración de los Derechos de los Impedidos”* (1975), *“Decenio de Acción Mundial para las personas con Discapacidad”* (1982), *“Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad”*, *“Normas Uniformes: Sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad”* (ONU 1993).

Ley 1346 de 2009, *“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”*”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006: dispone que el estado deberá propender por la educación de las personas con discapacidad: lengua de señas, sistema braille etc. (art. 24); condiciones de igualdad y reconocimiento (art. 30-4).

En cuanto a la carga de la prueba le incumbe al accionante, conforme al art. 30 de la Ley 472 de 1998.

La Sala Civil-Familia del tribunal Superior de este Distrito, señaló por ejemplo en sentencia del 15 de octubre de 2020¹⁰, que:

“Tales presupuestos deben ser demostrados en forma idónea, y de conformidad con el artículo 30 de la citada Ley 472, pesa sobre el actor popular la consiguiente carga probatoria, a menos que, por razones económicas o técnicas, no esté en capacidad de cumplirla”.

La carga de esa prueba, como luce natural de cara al artículo 30 de la Ley 472 de 1998, corresponde al actor popular.”

Y en providencia SP-0002-2022, explicó la Sala:

“En ese aspecto, todos los integrantes del extremo activo se limitaron a señalar la existencia de vulneración sin allegar o solicitar la práctica de alguna prueba, o siquiera referirse o insinuar la existencia de probanzas surgidas con posterioridad a la sentencia que definió el anterior trámite, que ameritaran un nuevo análisis de fondo. Tampoco enseñaron razones económicas o técnicas que les impidiera aportar las pruebas, que implicaran ordenar de oficio el recaudo de elementos suficientes para llegar a la decisión de fondo.”

En otra decisión, SP0057-2022, cito nuestro Tribunal:

¹⁰ Acción popular, demandado Audifarma. Expediente 66001-31-03-003-2016-00119-01. M.P. Jaime Alberto Saraza Naranjo.

“Al respecto la CC¹¹ en sentencia de constitucional reseñó: “(...) resulta admisible, lógico y necesario que la demostración de los perjuicios sufridos por una persona en uno de sus derechos e intereses colectivos, LE CORRESPONDA AL AFECTADO (...) trasladar la carga de la prueba al demandado como lo pretende el actor, equivaldría a presumir desde un comienzo, con la sola presentación de la demanda, su responsabilidad”

Frente al tema, igualmente se ha pronunciado el Consejo de Estado, como criterio auxiliar y señaló:

“Así, el juez debe examinar en cada caso, la existencia de vulneración o afectación de los intereses o derechos de carácter colectivo, de acuerdo con los medios de prueba que fueron aportados al expediente. Cabe recordar que la carga de la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se afirma la vulneración de los derechos colectivos, corresponde al accionante, quien a pesar de que puede ser auxiliado por el juez, no está relevado totalmente de su carga, como expresamente lo estableció el artículo 30 de la ley 472 de 1998, máxime si se tiene en cuenta que actúa movido no solo por el ánimo de proteger un derecho o interés colectivo, sino que a ese, se une el móvil de la retribución económica que la prosperidad de la acción le puede generar. Es decir, en las acciones populares, no basta que se alegue la afectación del derecho de naturaleza colectiva, sino que se requiere de la existencia de elementos probatorios que permitan al juez concluir que evidentemente se encuentra en presencia de su amenaza o vulneración.”

En cuanto a la carencia de objeto, en decisión SP-0028-2022 nuestra Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de este Distrito, señaló:

“Si durante el trámite de la acción popular desaparecen los supuestos de hecho alegados, es decir, se eliminan los motivos del amparo, es inane determinación judicial alguna porque se configura la carencia actual de objeto. Conforme jurisprudencia de la CE¹² (Criterio auxiliar) este fenómeno se presenta cuando:

*i) se prueba que a la fecha de la presentación de la demanda existía una vulneración o amenaza de un derecho e interés colectivo. En el evento en que no se acredite este aspecto, el juez deberá negar las pretensiones de la demanda; ii) en el curso del proceso judicial, cesa la amenaza o vulneración del derecho e interés colectivo; y iii) **al momento de proferir sentencia no es posible, por sustracción de materia, impartir órdenes de amparo del derecho e interés colectivo por falta de vulneración o amenaza.** En el caso en que la vulneración o amenaza cese como consecuencia del ejercicio de la acción popular, el juez de conocimiento deberá declarar la vulneración o amenaza de los derechos colectivos y precisar que esta se superó.”* (negrillas y resaltado en el texto original)

VI. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y DECISIÓN

6.1. PRESUPUESTOS PROCESALES

6.1.1. COMPETENCIA.

Este despacho es competente en primera instancia por la competencia atribuida por el factor objetivo según los artículos 16 de la Ley 472 de 1998 y 20 Nral. 7 del C.G.P, se dirige contra un particular y, atendiendo el factor territorial, en esta

¹¹ “CC. C-215-1999.”

¹² “CE. Fallo del 19-06-2020, CP: Sánchez R., No.50001-23-33-000-2012-00167-01 (AP)”.

Ciudad concurren el lugar de ocurrencia de los hechos y el del domicilio del accionado.

6.1.2. DEMANDA EN FORMA.

El artículo 18 de la ley 472 de 1998 establece que en las acciones populares la demanda debe estar conforme a las exigencias allí enunciadas, las cuales conforme lo ha dispuesto nuestro Tribunal Superior en Sala Civil-Familia se cumplen y por ello se admitió la demanda.

Se ha rituado esta acción a través del procedimiento preceptuado en la ley 472 de 1998.

6.1.3. CAPACIDAD PARA SER PARTE Y PROCESAL.

Los intervinientes gozan de capacidad para ser parte y procesal, el accionante es una persona natural, mayor de edad; y por ser una acción popular no requiere actuar por intermedio de abogado titulado (art. 13 Ley 472).

Si bien se demandó inicialmente al representante legal y/o al establecimiento de comercio, la norma especial no exige que la actora indique indefectiblemente a la parte accionada, así lo ha explicado también nuestro Superior en Sala Civil-Familia¹³; recuérdese que el establecimiento de comercio son esos bienes y servicios que agrupados sirven para que el comerciante ejerza su actividad y no se trata entonces de una persona jurídica. Por ende, quien debe acudir como parte es el propietario del mismo (Arts. 515 y 516 C. de Comercio, 14 Ley 472).

6.1.4 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.

Están legitimados por activa y pasiva, según la ley (artículos 13 y 14 de la ley 472 de 1998) las personas naturales o jurídicas que se vean perjudicados por la violación o amenaza a los derechos e intereses colectivos y aquellas que con su accionar u omisión, sean las que producen dicha violación o amenaza.

En este caso, actúa el señor Mario Restrepo, en defensa de la colectividad.

Al respecto la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior, explicó: “*Se cumple por activa, porque la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica. Prescribe el artículo 12º, Ley 472, establece: “(...) Podrán ejercitar las acciones populares: 1. Toda persona natural o jurídica (...)”, y el 13º que: “(...) Los legitimados para ejercer acciones populares pueden hacerlo por sí mismos o por quien actúe en su nombre (...)*”.

La CC en sede de constitucionalidad, de forma pacífica y consistente, comparte aquel razonamiento. También la Sala Civil de la CSJ en sede de tutela (Criterio auxiliar). De igual forma el CE (Criterio auxiliar), incluso, la denominó como legitimación “universal”, “general” o “por sustitución”.”¹⁴

¹³ TSP.ST1-0182-2021

¹⁴ SP-0026-2022

.- En el trámite de la demanda se imputa el perjuicio cuya protección se reclama al establecimiento accionado, pero debemos tener en cuenta que al no ser sujeto de derechos, el llamado a resolver es la propietaria del mismo, en este caso la sociedad Apreciar Seguros Ltda.

6.2 DEL CASO CONCRETO.

Tenemos hasta este punto que las partes son las legitimadas pues el accionante dice acudir en protección de la colectividad, y denuncia de la accionada la protección de esos derechos; además de los derechos que se enuncian como transgredidos tienen el carácter de colectivos.

El demandante considera que se vulneran los derechos colectivos enunciados en el literal j del artículo 4 de la ley 472 de 1998, al no contar la accionada con convenio con entidad certificada por el Ministerio de Educación Nacional apta para atender la población objeto de la Ley 982 de 2005, y como sitio de vulneración denuncia la carrera 7 Nro. 18-80 oficina 608 de esta Ciudad.

El curador ad-litem allegó el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, que da cuenta de la inscripción de la sociedad Apreciar Seguros Ltda., cuyo objeto social es la de *ofrecer seguros generales, seguros de vida, salud* etc., con un activo total de \$4.233.000,00. Con domicilio en el lugar denunciado. Allí también se indica que la sociedad está cancelada desde diciembre de 2022.

Igualmente aportó fotografías del ingreso al Edificio Centro Financiero, la ubicación de oficinas con número y nombre de quien ocupa cada una, y de la oficina 608 donde se lee un aviso de “AXA COLPATRIA” y horarios de atención.

Pruebas documentales que son conducentes y pertinentes en este caso, las fotográficas concuerdan con el informe dejado por la asistente del despacho al intentarse la notificación de la accionada, de que en esa dirección y específicamente en esa oficina no funciona ni se ubica la sociedad demandada.

Como prueba dispuesta por el despacho se recibió interrogatorio de parte al señor Herman Trujillo Hernández (archivo digital 40ActaAudiencia, enlace de grabación, min. 5:56), en su calidad de representante legal de la sociedad Apreciar Seguros Ltda., informó que *la dirección señalada en la demanda es la misma del Edificio Centro Financiero* y que *Apreciar Seguro no existe*; que su objeto era la *comercialización de SOAT pero que dada la situación de Ley con el SOAT, eso dejó de ser un negocio, y desde el año pasado se tomó la decisión de acabar con esa agencia*. Se le preguntó si para la fecha en que se radicó la demanda funcionaba el establecimiento de comercio en esa dirección contestó que: *NO, ya estaba AXA COLPATRIA, que el año pasado ya no tenían funcionamiento porque el tema del SOAT ya no era viable y se demoraron en la cancelación de la cámara de comercio por el cumplimiento de los requisitos legales*. Aclaró finalmente que el establecimiento dejó de prestar el servicio en esa dirección, *incluso desde antes de la pandemia, que Apreciar estuvo hasta por ahí el 2019*.

Con las pruebas recaudadas por el despacho y las aportadas por el curador ad-litem, es necesario concluir obviamente que desde tiempo antes a la presentación de la demanda, había dejado de funcionar en la dirección indicada como sitio de vulneración de derechos, la agencia de la sociedad Apreciar Seguros Ltda., con lo que obviamente, la pretensión de la acción popular carece de fundamento, sin que se presente un daño que evitar o que debiera ser resarcido, si fuera el caso.

Por lo tanto, como a la fecha de presentación de la demanda menos a la de esta sentencia, ya no existía jurídicamente el establecimiento de comercio, como tampoco se probó la vulneración de los derechos, ninguna prueba aportó el accionante; no existe cuestionamiento al respecto.

Ahora bien, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, reza: *“El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.”*

El artículo 79 del C.G.P., establece una presunción de temeridad o mala fe cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda; o se aleguen hechos contrarios a la realidad.

La demanda fue radicada el 27 de enero de 2022, fecha para la cual ya se encontraba cerrado el establecimiento y la matrícula mercantil cancelada; mientras el accionante denunció que la accionada incumplía con la Ley 982 de 2005, lo que demuestra el actuar negligente y de mala fe del actor popular que presenta infinidad de demandas, entre ellas la que nos ocupa, sin verificar la existencia y posible vulneración de derechos, presentando hechos falsos ante la administración de justicia, deberá acarrear con las consecuencias de su actuar injustificado. En ese entendido se le impondrá multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos¹⁵, y se condenará en costas en favor del accionado (Art. 365-1 C.G.P.).

Finalmente, en lo referente a las costas, en sentencia SP-0104-2022, explicó nuestra Sala Civil-Familia: *“ante el carácter especial de las acciones populares, no sería del caso aplicar los límites mínimos y máximos establecidos en dicho acuerdo. En su lugar, la tasación de las agencias en derecho, cuyo reconocimiento no tiene por objeto enriquecer al beneficiario de la condena, ni remunerar actividad profesional alguna, máxime cuando se actúa en nombre propio sin la asesoría de apoderado judicial, se hará en cada caso en particular tomando en consideración la actividad del extremo que triunfa, esto es, la naturaleza, calidad y duración de su gestión, tratándose del actor popular, bajo el norte de que ella sea apta para lograr la materialización de la defensa de los derechos colectivos cuya protección invocó”*. Sobre la condena en costas también se pronunció el tribunal en decisiones SP091-2022, SP092-2022, entre otras. Bajo ese entendido se condenará en costas a la accionada en favor del actor popular, las que se liquidarán en auto posterior.

¹⁵ SP-0006-2021

En firme la presente decisión, por secretaría se dará cumplimiento a lo preceptuado en el art. 80 de la ley 472 de 1998.

Por lo expuesto el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: Se deniegan las pretensiones de la demanda de ACCIÓN POPULAR promovida por el señor MARIO ALBERTO RESTREPO en contra de APRECIAR SEGUROS LTDA., por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Se impone multa al señor Mario Alberto Restrepo Zapata en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo del accionante y a favor del accionado, las que se liquidarán oportunamente por secretaria, las agencias en derecho se fijarán en auto posterior.

CUARTO: En firme la presente decisión, por secretaría se dará cumplimiento a lo preceptuado en el art. 80 de la ley 472 de 1998.

Notifíquese,

(con firma electrónica)

OLGA CRISTINA GARCÍA AGUDELO
Juez

Firmado Por:
Olga Cristina Garcia Agudelo
Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a7ecb3585ffbde2cc6de38952856bac524b39bab2399d156bc9e5fb288386829**


Documento generado en 12/07/2023 01:58:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO

CERTIFICO que en ESTADO No. 107 de la fecha, se notifica a las partes el auto anterior.

Pereira, Risaralda, 13 de julio de 2023.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final flourish that curves upwards and to the right.

JUAN CARLOS CAICEDO DIAZ
Secretario